

Es copia que certifico. México, Junio 16 de 1873. *Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por Sóstenes Cardona, contra el C. Presidente municipal de la Villa del Cedral que lo condenó á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que Sóstenes Cardona, sentenciado á la pena del último suplico por el C. presidente del republicano Ayuntamiento del Cedral, conforme á la ley de 23 de Mayo de 1872, por creérsele cómplice en el robo con asalto y homicidio perpetrado la noche del 18 de Enero en el punto de la Estancita, jurisdicción de la Villa del Cedral, solicita amparo de la Justicia federal, fundándose en que sin estar justificado ese participio en el delito de que se ha hecho mérito, se le ha impuesto la pena de muerte.

Aunque el solicitante no expresa determinadamente las garantías violadas en su persona, segun lo dispone el artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869, por el tenor literal de su solicitud de amparo se comprende muy claramente, que se queja de la falta de justificación con que fué pronunciada aquella pena tan terrible; y aun se refiere al 4º de los considerandos que ocuparon á la autoridad que lo juzgó.

En efecto, por esa parte de la sentencia se ve, que el C. Presidente de aquella corporación dá por sentado y confiesa, que conforme al derecho comun, las pruebas que existen contra Sóstenes Cardona no serian suficientes para pronunciar en su contra,

sentencia condenatoria, sin embargo de que por las leyes especiales, son suficientes las que existen en el proceso por bastar por ellas al convencimiento, segun las reglas del criterio comun, de que un individuo es culpable y por ello pueda aplicársele la pena designada por esas mismas leyes especiales.

El Ministerio no está conforme con esa opinion de la autoridad que ha juzgado á Cardona, porque no ve que las leyes especiales, cualesquiera que sean, y tambien el objeto á que se dirijan, puedan sobreponerse á las comunes, menguando por decirlo así los preceptos imprescriptibles determinados por las leyes naturales, que exigen y han obligado siempre á la autoridad que juzga, que al imponer la pena y mas la terrible de muerte, se obre con toda la circunspeccion, reposo é imparcialidad propias y convenientes á un fallo arreglado y justo. Quieren y han querido siempre esas disposiciones, que al imponerse la pena, sea despues de que aparezca que se hayan obtenido contra el responsable, las pruebas mas perfectas y completas que no dejen duda de la culpabilidad del delincuente contra quien se procede, y por eso aun previenen, que estas sean tan claras como la luz del medio dia, y aun en su espíritu se explican al grado de prevenirse, que por falta de ellas, vale mas dejar impune un delito.

Siendo esto así, no hay duda en que Cardona ha sido sentenciado fuera de las reglas prescritas por el derecho comun, y propiamente por meras coincidencias, indicios y sospechas, tan aisladas unas de las otras, que nunca pueden reunidas dar una prueba completa del delito porque se le ha juzgado. Esto lo dan á entender los varios puntos del 2º de los considerandos en que se funda dicha sentencia, pues por ellos se vé segun la copia que corre agregada á las fojas 8, 9 y 10 de esta pieza, que Cardona fué sentenciado á la pena última por haber asegurado á María del Refugio Córdova, persona de la familia robada, que lo conoció la tiempo del

asalto, que el citado Cardona tenia pantalón blanco, traje que segun Eusebio Castillo esposo de aquella mujer, asegura portaba el capitan de ladrones; que el mismo Cardona al ser aprehendido en su casa estaba ébrio, lo mismo que lo estaban los salteadores al tiempo de la perpetracion del hecho, y por último; que segun la disposicion de Angel Yañes, una de las huellas de los ladrones se demostraba en que los zapatos que traía estaban apuntillados, lo que conformaba con el calzado que se le encontró al referido Cardona al ser aprehendido.

Estos son y no otros los datos que se tuvieron presentes y sirvieron de fundamento á la autoridad política del Cedral para la imposicion de la pena de muerte; mas esos datos son por sí tan frívolos, que ni identifican la persona del acusado, ni bastan para la imposicion de pena alguna, y menos para la mayor que puede imponerse al delincuente.

Por esa misma sentencia de que se ha hecho mencion, se vé tambien que Cardona presentó por testigos para probar la coartada á Teófilo Tello y Marcelino García; mas el testimonio de estas personas fué calificado de inverosímil, solo por que á la autoridad que juzgó á Cardona no le pareció conducente; pero ese testimonio sea lo que fuere debilita en gran parte esas conjeturas que sirvieron de fundamento para la sentencia, y la calificacion que de él se hizo lo mismo que de la tacha que el reo puso al dicho de María Refugio Córdoba en favor de quien se esplica superabundantemente aquel funcionario, dispensando todo apoyo y otras consideraciones, demuestran evidentemente que la autoridad mas bien afectada por las personas robadas, solo procuró en su sentencia no agravar la condicion del acusado y no exculparlo, ni dispensarle aquellas consideraciones legales que merecia por no estar el delito justificado tal como previene el derecho.

En vista pues de lo ameritado, el Ministerio opina por que se pida original la causa seguida á Cardona, así para cerciorarse

de la realidad de los hechos que la motivaron, como para tener el conocimiento de si ha gozado de las garantías concedidas por el artículo 20 de la Constitucion federal; supuesto que aparece, que por la copia de la sentencia que se acompaña no ha habido toda la justificacion para juzgar de parte de la autoridad que lo ha sentenciado, cuyo pedido lo funda el Ministerio en lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de 20 de Enero de 1869; y obtenida que sea la prueba que se pretende, la cual en concepto del mismo Ministerio debe ser favorable al reo, el juzgado tendrá á bien dispensar el amparo que solicita, siempre que este mi parecer lo crea conforme á justicia.—San Luis Potosí, Arbil 15 de 1873.—Gregorio Vasquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Mayo 9 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el reo Sostenes Cardona, contra la sentencia del C. Jefe municipal del Cedral, que lo condenó á la pena de muerte por el delito de robo con asalto.—Considerando: que con violacion de la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion de 5 de Febrero de 1857, no se ha aplicado exactamente en la persona de Sostenes Cardona la ley de 18 de Mayo de 1871, declarada en vigor por la de 23 de Mayo de 1872, porque se le ha condenado á la pena de muerte sin estar probado plenamente que sea autor del delito de robo con asalto, contra lo que previene en el artículo 5º la primera de las citadas leyes, en armonía con las 7 tit. 31, 26 tit. 1º Part. 7ª y 12 tit. 14 Partida 3ª, como aparece de la causal siguiente de la sentencia: “4º *Que aunque por el derecho comun, las pruebas que existen contra Sostenes Cardona no serian suficientes para pronunciar sentencia condenatoria, sin embargo, por las leyes especiales que han encomendado á las autoridades políticas el conocimiento de estos juicios, di-*

chas pruebas son suficientes, porque basta por ellas estar convencidos por las reglas del criterio comun, de que un individuo es culpable, para que pueda aplicarse la pena designada por la ley."—Que aun cuando en casos escepcionales, como el de delito de robo con asalto, debe aplicarse pena cuando existan presunciones vehementes contra un reo, atendiendo al principio de seguridad social, esa pena no debe ser la ordinaria de muerte sino una extraordinaria, como lo funda perfectamente bien Mittermaier en los capítulos 64, 69 y demas correlativos de su tratado "De la Prueba en materia criminal."—Que á ser cierto que las reglas del criterio comun bastasen para imponer la pena de muerte por el delito de robo con asalto, se abrirá un ancho campo á la arbitrariedad y quedaría en la mayor inseguridad la vida del hombre que es una garantía tan preciosa, que el artículo 29 de la Constitucion la deja siempre á salvo aun en las mas críticas circunstancias de la sociedad.—Por tales consideraciones, por los fundamentos legales expresados y el artículo 101 fraccion 1ª de la Constitucion, debia declarar y declaro: que la Justicia de la Union ampara y protege al reo Sostenes Cardona, contra la sentencia del C. Jefe municipal del Cedral que lo condenó á la pena de muerte por el delito de robo con asalto.—Hágase saber; publíquese en los periódicos, y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Union.

Así definitivamente juzgando, lo decretó y firmó el C. Lic. Conrado Diaz Soto, Juez de Distrito del Estado.

Damos fé.—Firmado— *Conrado Diaz Soto.*—*Antonio R. Jimenez.*—*Bernardo Galindo.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Mayo 10 de 1873.—*Conrado Diaz Soto.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 4 de Junio de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de San Luis Potosí, por Sostenes Cardona, quejándose de que el C. Presidente Municipal de la Villa del Cedral, lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte, por atribuírsele ser cómplice de la ejecucion de los delitos de robo con asalto en la casa del C. Eusebio Castillo, la noche del 18 de Enero de este año, y del de homicidio perpetrado en la persona del C. Casimiro Hernandez, Alcalde auxiliar del punto llamado la Estancita, al momento de que esta autoridad iba á prestar el debido auxilio para la aprehension de los criminales. Vistas las constancias de autos; el pedimento del Promotor fiscal del Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, sosteniendo la procedencia legal del recurso promovido; lo alegado por el quejoso, y probado por su defensor, y atenta la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo pedido. Considerando 1º: que de las mismas constancias de autos aparece, que no está suficientemente comprobado como se requiere en derecho, que Sostenes Cardona haya sido uno de los asaltantes, y mucho menos que el haya disparado el balazo de que provino la muerte del Juez que daba auxilio en el acto de la ejecucion del robo: que si bien es cierto que de los ocho testigos que fueron examinados, la mayor parte de ellos vieron el cadaver del auxiliar, de esto no puede inferirse rectamente que Cardona haya sido quien disparó el balazo que produjo la muerte, por que una cosa es que los testigos hayan visto al muerto, y otra que hubieran visto quien lo ejecutó, sobre cuyo último caso no forman plena prueba las deposiciones recibidas. 2º: Que el Presidente Municipal del Cedral, en los considerandos de la sentencia de muerte que pronunció el dia 11 de Febrero último, manifiesta, que las declaraciones de los testigos examinados

eran bastantes para imponer la pena al supuesto reo, esto no es exacto, porque solo existe la *declaracion singular* de la testigo María Refugio Córdova, que en el acto del robo creyó ver al hombre Sóstenes Cardona vestido de pantalon blanco y jorongo negro, cuya noticia transmitió á su marido Eusebio Castillo, y en la declaracion de este testigo, no aparece que haya reconocido al mismo hombre citado por su muger, bien haya sido por la sorpresa y temor de que se hallaba poseido, ó bien porque realmente no lo haya visto, en cuyo caso debe considerarse aislada y como singular, la aseveracion de María Refugio Córdova, y 3º: que en el caso presente, esto es, en la conclusion de la sumaria averiguacion del robo con asalto de que se trata, no ha debido aplicarse la pena de muerte, porque falta la aplicacion exacta de la ley de 18 de Mayo de 1871 en su artículo 5º, declarada vigente por la de 23 de Mayo de 1872. Por tales razones y fundamentos debía de confirmarse y desde luego se confirma la sentencia que pronunció en San Luis Potosí el Juez de Distrito de ese Estado, en 9 de Mayo del corriente año, declarando: Que la Justicia de la Union ampara y protege al reo Sóstenes Cardona, contra la sentencia del C. Jefe Municipal del Cedral, que lo condenó á la pena de muerte por el delito de robo con asalto. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Najera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 1º

de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Antonio Espinosa, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

La autoridad contra quien ha dirigido la queja el soldado Antonio Espinosa, no ha justificado la legalidad de su procedimiento, ni el jefe del cuerpo en que sirve ha siquiera contestado la comunicacion que el Juzgado de su digno cargo le dirigió, pidiéndole las constancias de que hubiera sido soldado antiguo disperso, el quejoso.

Este ha probado con una informacion testimonial, que no ha sido desertor de ningun cuerpo, y que es hijo de madre viuda á quien sostiene con los productos de su corporal trabajo.

Tal prueba convence de que su consignacion al ejército fué contra todo derecho, y que por ser hijo de madre viuda está exceptuado de prestar sus servicios en la carrera de las armas.

En consecuencia, el acto de la gefatura por el que se destinó á Espinosa al escuadron número 15, importa la violacion del artículo 5º de la Constitucion y la ley de 17 de Mayo del año pasado. Por estas razones debe ampararse á dicho Espinosa, con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869. Así pide á V. el Promotor se sirva determinarlo, por ser de justicia.—Zaragoza, Mayo 13 de 1873.—*E. Sanchez.*